

Herbert Spencer
Revista Contemporánea, mayo de 1884

LA ESCLAVITUD VENIDERA ***(la futura esclavitud)***

El parentesco de la piedad con el amor se manifiesta, entre otras cosas, en que idealiza su objeto. La simpatía por el que sufre suprime, por el momento, el recuerdo de sus transgresiones. El sentimiento que se desahoga en "¡pobre hombre!" al ver a uno en agonía, excluye el pensamiento de "mal hombre", que podría surgir en otro momento. Naturalmente, entonces, si los miserables son desconocidos o vagamente conocidos, todos los deméritos que puedan tener son ignorados; y así sucede que cuando, como ahora, las miserias de los pobres son representadas, son pensadas como las miserias de los pobres merecedores, en lugar de ser pensadas, como en gran medida deberían serlo, como las miserias de los pobres no merecedores. Aquellos cuyas penurias se exponen en panfletos y se proclaman en sermones y discursos que resuenan en toda la sociedad, se supone que son todos almas dignas, gravemente agraviadas, y no se piensa que ninguno de ellos cargue con las penas de sus propias fechorías.

Cuando se llama a un taxi en una calle de Londres, sorprende ver cómo suele abrir oficiosamente la puerta alguien que espera obtener algo por las molestias. La sorpresa disminuye después de contar los muchos holgazanes en las puertas de las tabernas, o después de observar la rapidez con la que un espectáculo callejero, o una procesión, atrae de los barrios bajos y establos vecinos a un grupo de holgazanes. Al ver cuán numerosos son en cada pequeña zona, se hace evidente que decenas de miles de ellos pululan por Londres. "No tienen trabajo", diréis. Diga más bien que rechazan el trabajo o que lo abandonan rápidamente. Son simplemente buenos para nada, que de un modo u otro viven de los buenos para algo: vagabundos y vagabundos, criminales y los que van camino del crimen, jóvenes que son una carga para los padres que trabajan duro, hombres que se apropian de los salarios de sus esposas, compañeros que comparten las ganancias de las prostitutas; y luego, menos visible y menos numerosa, hay una clase correspondiente de mujeres.

¿Es natural que la felicidad sea la suerte de los tales? o ¿es natural que provoquen la infelicidad en sí mismos y en los que se relacionan con ellos? ¿No es evidente que debe existir entre nosotros una inmensa cantidad de miseria que es el resultado normal de la mala conducta y que no debe dissociarse de ella?

Existe la idea, siempre más o menos extendida y ahora expresada a gritos, de que todo sufrimiento social es eliminable, y que es deber de unos u otros eliminarlo. Ambas creencias son falsas. Separar el dolor de la mala acción es luchar contra la constitución de las cosas, y será seguido por mucho más dolor. Salvar a los hombres de las penas naturales de la vida imprudente finalmente necesita la imposición de penas artificiales en celdas solitarias, en ruedas de molino y con el látigo. Supongo que una sentencia en la que coinciden el credo actual y el credo de la ciencia puede considerarse de la más alta autoridad que pueda encontrarse. Pues bien, el mandamiento "si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma" es simplemente una enunciación cristiana de esa ley universal de la Naturaleza bajo la cual la vida ha alcanzado su actual apogeo: la ley de que una criatura que no tiene suficiente energía para mantenerse a sí misma debe morir; la única diferencia es que la ley que en un caso debe ser aplicada artificialmente es, en el otro, una necesidad natural. Y, sin embargo, este principio particular de su religión, que la ciencia justifica tan manifiestamente, es el que los cristianos parecen menos inclinados a aceptar. Se supone que no debería haber sufrimiento y que la sociedad es culpable del que existe.

"Pero seguramente no estamos exentos de responsabilidades, incluso cuando el sufrimiento es el de los indignos".

Si el significado de la palabra "nosotros" se amplía hasta incluir con nosotros a nuestros antepasados, y especialmente a nuestros legisladores ancestrales, estoy de acuerdo. Admito que aquellos que hicieron, modificaron y administraron la antigua ley de pobres fueron responsables de producir una terrible desmoralización, que llevará más de una generación eliminar. Admito, también, la responsabilidad parcial de los legisladores recientes y actuales por las regulaciones que han dado lugar a un cuerpo permanente de vagabundos, que deambulan de sindicato en sindicato; y también su responsabilidad por mantener un suministro constante de delincuentes al devolver a los convictos a la sociedad en condiciones tales que casi se ven obligados de nuevo a cometer delitos. Además, admito que los filántropos no están exentos de su parte de responsabilidad, ya que, mientras ayudan ansiosamente a los hijos de los indignos, no hacen nada por los hijos de los dignos, salvo cargar a sus padres con el aumento de las tasas locales. Kay, incluso admito que estos enjambres de inútiles, fomentados y multiplicados por organismos públicos y privados, han sufrido más de lo que habrían sufrido de no ser por ellos. ¿Son éstas las responsabilidades a las que nos referimos? Sospecho que no.

Pero ahora, dejando la cuestión de las responsabilidades, como quiera que se conciben, y considerando sólo el mal en sí, ¿qué diremos de su tratamiento? Permítanme comenzar con un hecho.

Un difunto tío mío, el reverendo Thomas Spencer, durante unos veinte años titular de la cartuja de Hinton, cerca de Bath, no bien asumió sus obligaciones parroquiales, demostró su preocupación por el bienestar de los pobres, estableciendo una escuela, una biblioteca, un club de ropa y asignaciones de tierras, además de construir algunas cabañas modelo. Además, hasta 1833 fue amigo de los pobres, siempre a favor de ellos. Contra el supervisor. Sin embargo, pronto llegaron los debates sobre la ley de pobres, que le impresionaron con los males del sistema entonces en vigor. Aunque era un ardiente filántropo, no era un tímido sentimentalista. El resultado fue que, en cuanto se aprobó la nueva ley de pobres, procedió a aplicar sus disposiciones en su parroquia. Se encontró con una oposición casi universal, no sólo de los pobres, sino incluso de los campesinos, sobre los que recaía la carga de los elevados impuestos. Porque, por extraño que parezca, sus intereses se habían identificado aparentemente con el mantenimiento de este sistema que les gravaba tan ampliamente. La explicación es que había surgido la práctica de pagar de las tasas una parte de los salarios de cada sirviente agrícola, "salarios de compensación", como se llamaba a esta suma. Y aunque los granjeros contribuían con la mayor parte del fondo con el que se pagaban los "sueldos complementarios", como todos los demás contribuyentes contribuían, los granjeros parecían salir ganando con el arreglo. Sin embargo, mi tío, que no se amilanaba fácilmente, hizo frente a toda esta oposición y aplicó la ley. El resultado fue que en dos años las tasas se redujeron de 700 a 200 libras esterlinas al año, mientras que la situación de la parroquia mejoró considerablemente. "Aquellos que hasta entonces habían holgazaneado en las esquinas de las calles o a las puertas de las cervecerías, tuvieron algo más que hacer, y uno tras otro obtuvieron empleo"; de modo que, de una población de ochocientos habitantes, sólo quince tuvieron que ser enviados como indigentes incapaces al Bath Union Workhouse, en lugar de los cien que recibieron ayuda externa poco tiempo antes. Si se dice que el telescopio de 20 libras esterlinas que, unos años después, sus feligreses regalaron a mi tío, sólo reflejaba la gratitud de los contribuyentes, mi respuesta es el hecho de que, cuando algunos años más tarde, habiéndose suicidado por exceso de trabajo, en pos del bienestar popular, fue llevado a Hinton para ser enterrado, la procesión que lo siguió hasta la tumba no incluía sólo a los acomodados, sino también a los pobres.

Varios motivos han impulsado esta breve narración. Uno es el deseo de demostrar que la simpatía por el pueblo y los esfuerzos abnegados en su favor no

implican necesariamente la aprobación de ayudas gratuitas. Otro es el deseo de demostrar que el beneficio puede resultar, no de la multiplicación de aparatos artificiales para mitigar la angustia, sino, por el contrario, de la disminución de los mismos. Y otro propósito que tengo en mente es el de preparar el camino para una analogía.

Bajo otra forma y en una esfera diferente, ahora estamos extendiendo anualmente un sistema que es idéntico en naturaleza al sistema de "salarios compensatorios" bajo la antigua ley de pobres. Por poco que los políticos reconozcan el hecho, es sin embargo demostrable que estos diversos aparatos públicos para la comodidad de la clase obrera, que están suministrando a costa de los contribuyentes, son intrínsecamente de la misma naturaleza que los que, en épocas pasadas, trataban al agricultor como mitad obrero y mitad pobre. En ambos casos, el trabajador recibe, a cambio de lo que hace, dinero con el que comprar algunas de las cosas que desea; mientras que, para procurarse el en el resto de los casos, el dinero procede de un fondo común recaudado mediante impuestos. ¿Qué importa si las cosas suministradas por los contribuyentes a título gratuito, en lugar de por el empleador en pago, son de este o de aquel tipo? el principio es el mismo. Sustituyamos las sumas percibidas por las mercancías y prestaciones adquiridas, y veremos cómo queda el asunto. En los viejos tiempos de la ley de pobres, el agricultor daba por el trabajo realizado el equivalente, digamos, del alquiler de la casa, el pan, la ropa y el fuego; mientras que los contribuyentes prácticamente suministraban al hombre y a su familia sus zapatos, té, azúcar, velas, un poco de tocino, etc. La división es, por supuesto, arbitraria; pero es incuestionable que el agricultor y los contribuyentes proporcionaban estas cosas entre ellos. En la actualidad, el artesano recibe de su empleador, en forma de salario, el equivalente de los bienes consumibles que necesita, mientras que el público satisface para otros sus necesidades y deseos. A costa de los contribuyentes, tiene en algunos casos, y pronto tendrá en otros, una casa a menos de su valor comercial; porque, por supuesto, cuando, como en Liverpool, un municipio gasta casi 200.000 libras en derribar y reconstruir viviendas de clase baja, y está a punto de volver a gastar otro tanto, la implicación es que, de alguna manera, los contribuyentes proporcionan a los pobres más alojamiento del que habrían obtenido de otro modo con los alquileres que pagan. Además, el artesano recibe de ellos, en concepto de escolarización de sus hijos, mucho más de lo que paga; y es muy probable que en el futuro lo reciba de ellos gratuitamente. Los contribuyentes también satisfacen su deseo de tener libros y periódicos, y lugares cómodos para leerlos. En algunos casos, como en Manchester, se proporcionan gimnasios para los niños de ambos sexos, así como zonas de recreo. Es decir, obtiene, de un fondo recaudado mediante impuestos locales, ciertos beneficios más allá de los que la suma recibida por su

trabajo le permite comprar. La única diferencia, por tanto, entre este sistema y el antiguo sistema de "salarios compensatorios" es entre los tipos de satisfacciones obtenidas; y esta diferencia no afecta en lo más mínimo a la naturaleza del acuerdo.

Además, ambos están impregnados de la misma ilusión. En un caso, como en el otro, lo que parece una prestación gratuita no lo es. La cantidad que, bajo la antigua ley de pobres, recibía de la parroquia el jornalero medio indigente para subsanar sus ingresos semanales no era realmente, como parecía, una bonificación, pues iba acompañada de una disminución sustancialmente equivalente de su salario, como se comprobó rápidamente cuando se abolió el sistema y los salarios aumentaron. Lo mismo ocurre con estas aparentes ventajas que reciben los trabajadores en las ciudades. No me refiero sólo al hecho de que, sin saberlo, pagan en parte a través del aumento de los alquileres de sus viviendas (cuando no son contribuyentes reales), sino que me refiero al hecho de que los salarios recibidos por ellos son, como los salarios de los trabajadores agrícolas, disminuidos por estas cargas públicas que recaen sobre los empleadores. Léanse los relatos procedentes últimamente de Lancashire sobre la huelga del algodón, que contienen pruebas, dadas por los propios artesanos, de que el margen de beneficio es tan estrecho que los menos hábiles. Por otra parte, el hecho de que los fabricantes de automóviles, así como los que tienen un capital deficiente, fracasen, y que las empresas de cooperativistas que compiten con ellos rara vez puedan mantenerse; y luego considerar cuál es la implicación con respecto a los salarios. Entre los costes de producción hay que contar los impuestos, generales y locales. Si, como en nuestras grandes ciudades, las tasas locales ascienden ahora a un tercio del alquiler o más, si el empresario tiene que pagar esto, no sólo por su vivienda privada, sino por sus locales comerciales, fábricas, almacenes o similares, resulta que el interés de su capital debe disminuir en esa cantidad, o la cantidad debe tomarse del fondo de salarios, o en parte una cosa y en parte la otra. Y si la competencia entre los capitalistas en el mismo negocio y en otros negocios tiene el efecto de mantener tan bajos los intereses que, mientras algunos ganan, otros pierden, y no pocos se arruinan -si el capital, al no obtener un interés adecuado, fluye a otra parte y deja a la mano de obra desempleada- entonces es evidente que la elección para el artesano en tales condiciones se encuentra entre la disminución de la cantidad de trabajo o la disminución de la tasa de pago por el mismo. Además, por razones similares, estas cargas locales elevan los costes de los productos que consume. Las cargas de los distribuidores también están determinadas, por término medio, por los tipos actuales de interés sobre el capital utilizado en las empresas de distribución; y los costes adicionales de llevar a cabo tales empresas tienen que pagarse con precios adicionales. De modo que, al igual que en el pasado el

trabajador rural perdía de una manera lo que ganaba de otra, lo mismo le ocurre en la actualidad al trabajador urbano; existiendo, además, en ambos casos, la pérdida que supone para él el coste de la administración y el despilfarro que la acompaña.

"Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con 'la esclavitud venidera'?", se preguntará quizás. Nada directamente, pero mucho indirectamente, como veremos después de otra sección preliminar.

Se dice que, cuando se inauguró el ferrocarril en España, los campesinos que se encontraban en las vías eran atropellados con frecuencia, y que la culpa recaía en los maquinistas por no detenerse, ya que la experiencia rural no les había dado una idea del impulso de una gran masa que se mueve a gran velocidad.

El incidente me viene a la memoria al contemplar las ideas del llamado político "práctico", en cuya mente no entra el pensamiento de tal cosa como el impulso político, y menos aún de un impulso político que, en lugar de disminuir o permanecer constante, aumente. La teoría con la que procede diariamente es que el cambio causado por su medida se detendrá donde él pretende que se detenga. Contempla atentamente las cosas que su acto logrará, pero piensa poco en las cuestiones más remotas del movimiento que su acto establece, y menos aún en sus cuestiones colaterales. Cuando, en tiempos de guerra, el "alimento para la pólvora" debía ser proporcionado mediante el fomento de la población, cuando el Sr. Pitt dijo: "Hagamos que el alivio en los casos en que hay un número de niños sea una cuestión de derecho y honor, en lugar de un motivo de oprobio y desprecio", no se esperaba que las tasas de los pobres fueran que las mujeres con muchos bastardos serían preferidas como esposas a las mujeres modestas debido a sus ingresos de la parroquia, y que muchos contribuyentes serían arrastrados a las filas del pauperismo. Los legisladores que en 1833 votaron 20.000 libras esterlinas al año para ayudar a la construcción de escuelas, nunca supusieron que el paso que entonces dieron conduciría a contribuciones forzosas, locales y generales, que ahora ascienden a 6.000.000 de libras esterlinas; no pretendían establecer el principio de que A debía hacerse responsable de la educación de la descendencia de B; No soñaban con una obligación que privara a las viudas pobres de la ayuda de sus hijos mayores; y menos aún soñaban con que sus sucesores, al exigir a los padres empobrecidos que solicitaran a las juntas de tutores el pago de las cuotas que las juntas escolares no remitieran, iniciaran el hábito de solicitar a las juntas de tutores y causaran así la pauperización. Tampoco aquellos que en 1834 aprobaron una ley que regulaba el trabajo de mujeres y niños en ciertas fábricas imaginaron que el

sistema que estaban iniciando terminaría en la restricción e inspección del trabajo en todo tipo de establecimientos productivos donde se emplearan más de cincuenta personas; Tampoco concebían que la inspección prevista crecería hasta el punto de exigir que, antes de emplear a un "joven" en una fábrica, un cirujano certificador, quien, mediante un examen personal (al que no se impone ningún límite), se haya cerciorado de que no existe ninguna enfermedad incapacitante o dolencia corporal, deba dar su autorización para que el "joven" perciba o no un salario.[3] Menos aún, como digo, concibe el político que se jacta del carácter práctico de sus objetivos los resultados indirectos que seguirán a los resultados directos de sus medidas. Así, para tomar un caso relacionado con uno de los nombrados anteriormente, no se pretendía mediante el sistema de "pago por resultados" hacer nada más que dar a los maestros un estímulo eficaz; no se suponía que en muchos casos su salud cedería bajo el estímulo; no se esperaba que se les llevaría a adoptar un sistema de atiborramiento y a ejercer una presión indebida sobre los niños aburridos y débiles, a menudo para su gran perjuicio; no se previó que en muchos casos se causaría un debilitamiento corporal que ninguna cantidad de gramática y geografía puede compensar. Tampoco se les ocurrió a los políticos prácticos que establecieron una línea de carga obligatoria para los buques mercantes, que la presión de los intereses de los armadores provocaría habitualmente la colocación de la línea de carga en el límite más alto, y que de precedente en precedente, tendiendo siempre en la misma dirección, la línea de carga aumentaría gradualmente, como de buena fuente sé que ya ha sucedido. Los legisladores que, hace unos cuarenta años, obligaron por ley del Parlamento a las compañías de ferrocarriles a suministrar locomoción barata, habrían ridiculizado la creencia, si se hubiera expresado, de que con el tiempo su ley castigaría a las compañías que mejoraran el suministro; y sin embargo, este fue el resultado para las compañías que comenzaron a transportar pasajeros de tercera clase en trenes rápidos, ya que se les infligió una multa por el importe del derecho de pasajeros por cada pasajero de tercera clase transportado. A este ejemplo relativo a los ferrocarriles, se añade otro mucho más llamativo revelado por comparando las políticas ferroviarias de Inglaterra y Francia. Los legisladores que dispusieron la cesión definitiva de los ferrocarriles franceses al Estado nunca concibieron la posibilidad de que se produjera una inferioridad en las facilidades para viajar; no previeron que la renuencia a depreciar el valor de la propiedad que eventualmente pasara al Estado impediría la autorización de líneas competidoras, y que en ausencia de líneas competidoras la locomoción sería relativamente costosa, lenta e infrecuente; pues, como ha demostrado Sir Thomas Farrar, el viajero en Inglaterra tiene grandes ventajas sobre el viajero francés en la economía, rapidez y frecuencia con que pueden realizarse sus viajes.

Pero el político "práctico", que, a pesar de tales experiencias repetidas generación tras generación, sigue pensando sólo en resultados próximos, naturalmente nunca piensa en resultados aún más remotos, aún más generales y aún más importantes que los que acabamos de ejemplificar. Para repetir la metáfora empleada anteriormente, nunca se pregunta si el impulso político creado por su medida, en algunos casos decreciente pero en otros muy creciente, tendrá o no la misma dirección general con otros impulsos semejantes, y si no se unirá a ellos para producir en el presente una energía agregada que produzca cambios nunca pensados. Pensando sólo en los efectos de su corriente particular de legislación, y sin observar cómo otras corrientes similares ya existentes, y otras corrientes que seguirán su iniciativa, siguen el mismo curso medio, nunca se le ocurre que pueden unirse en una inundación voluminosa que cambie completamente la faz de las cosas. O, para dejar las cifras para un enunciado más literal, es inconsciente de la verdad de que está ayudando a formar un cierto tipo de organización social, y que medidas afines, efectuando cambios afines de organización, tienden con fuerza cada vez mayor a generalizar ese tipo, hasta que, pasado cierto punto, la proclividad hacia él se hace irresistible. Del mismo modo que cada sociedad se esfuerza, cuando es posible, por producir en otras sociedades una estructura semejante a la suya, del mismo modo que, entre los griegos, los espartanos y los atenienses lucharon separadamente por difundir sus respectivas instituciones políticas, o que, en la época de la Revolución Francesa, las monarquías europeas se esforzaron por restablecer la monarquía en Francia, así, dentro de cada sociedad, cada especie de estructura tiende a propagarse. Así como el sistema de cooperación voluntaria de empresas, asociaciones, sindicatos, para conseguir fines empresariales y otros fines, se propaga por toda una comunidad, así se propaga el sistema antagónico de cooperación obligatoria bajo organismos estatales, y cuanto mayor es su extensión más poder de propagación obtiene. La pregunta de las preguntas para el político debería ser siempre: "¿Qué tipo de estructura social tiendo a producir?". Pero es una pregunta que apenas se plantea.

Aquí nos entretendremos por él. Observemos ahora el curso general de los cambios recientes, con la corriente de ideas que los acompañan, y veamos hacia dónde nos llevan.

La forma en blanco de una pregunta que se formula a diario es: "Ya hemos hecho esto; ¿por qué no deberíamos hacer aquello?". Y la consideración por el precedente que sugiere está siempre presionando sobre la legislación reguladora. Las leyes que limitan los horarios de trabajo y regulan el trato de los obreros se aplican ahora a los comercios. De la inspección de las casas de

hospedaje para limitar el número de ocupantes y hacer cumplir las condiciones sanitarias, se ha pasado a la inspección de todas las casas de alquiler inferior a cierta cantidad en las que hay miembros de más de una familia, y ahora se está pasando a una inspección análoga de todas las casas pequeñas. La compra y explotación de telégrafos por parte del Estado se convierte en una razón para instar a que el Estado compre y explote los ferrocarriles. El suministro de alimentos para la mente de los niños por parte del Estado va seguido en algunos casos del suministro de alimentos para el cuerpo; y, después de que la práctica se haya generalizado gradualmente, podemos anticipar que el suministro que ahora se propone que sea gratuito en un caso, acabará proponiéndose que sea gratuito en el otro, con el argumento lógico de que tanto los buenos cuerpos como las buenas mentes son necesarios para formar buenos ciudadanos. Y luego, basándose abiertamente en los precedentes proporcionados por la iglesia, la escuela y la sala de lectura, todos ellos proporcionados públicamente, se sostiene que "el placer, en el sentido en que ahora se admite generalmente, necesita ser legislado y organizado al menos tanto como el trabajo".

No sólo los precedentes impulsan esta propagación, sino también la necesidad que surge de complementar las medidas ineficaces y de hacer frente a los males artificiales causados continuamente. El fracaso no destruye la fe en los organismos empleados, sino que simplemente sugiere un uso más estricto de tales organismos o ramificaciones más amplias de los mismos. Las leyes para controlar la intemperancia, que comenzaron en los primeros tiempos y han llegado hasta nuestros días, cuando las restricciones adicionales a la venta de licores embriagantes ocupan las noches de cada sesión, al no haber hecho lo que se esperaba, surgen demandas de leyes más rigurosas, que impidan localmente la venta por completo; y aquí, como en América, sin duda serán seguidas por demandas de que la prevención se haga universal. Al no haber tenido éxito todos los dispositivos para "erradicar" las enfermedades epidémicas en la prevención de brotes de viruela, fiebres y similares, se solicita un remedio adicional en forma de poder policial para registrar las casas en busca de personas enfermas, y autoridad para que los funcionarios médicos examinen a cualquier persona que consideren oportuno, para ver si padece una enfermedad infecciosa o contagiosa. Habiendo sido cultivados durante generaciones los hábitos de improvidencia por la ley de pobres, y habiéndose permitido a los imprevistos multiplicarse, se propone ahora que los males producidos por la caridad obligatoria sean cubiertos por el seguro obligatorio.

La extensión de esta política, que provoca la extensión de las ideas correspondientes, fomenta en todas partes la suposición tácita de que el

Gobierno debe intervenir siempre que algo no vaya bien. "¡Seguro que no quieren que esta miseria continúe!" exclama alguien, si insinúa una objeción a mucho de lo que ahora se dice y se hace. Observa lo que implica esta exclamación. En primer lugar, da por sentado que todo sufrimiento debe ser evitado, lo cual no es cierto: mucho sufrimiento es curativo, y evitarlo es evitar un remedio. En segundo lugar, da por sentado que todo mal puede ser eliminado: la verdad es que, con los defectos existentes en la naturaleza humana, muchos males sólo pueden ser empujados de un lugar o forma a otro lugar o forma, siendo a menudo aumentados por el cambio. La exclamación también implica la creencia sin vacilaciones, especialmente en lo que nos concierne, de que los males de todo tipo deben ser tratados por el Estado. No se plantea la cuestión de si existen otros organismos capaces de hacer frente a los males, y si los males en cuestión no pueden estar entre los que son mejor tratados por estos otros organismos. Y, obviamente, cuanto más numerosas son las intervenciones gubernamentales, más se confirma este hábito de pensamiento y más ruidosas y perpetuas son las demandas de intervención.

Toda extensión de la política reguladora implica una adición a los agentes reguladores un mayor crecimiento del oficialismo y un poder creciente de la organización formada por funcionarios. Tome un par de balanzas con muchos perdigones en una y pocos en la otra. Levantad tiro tras tiro de la balanza cargada y ponedlo en la balanza descargada. Enseguida se producirá un equilibrio y, si se continúa, la posición de las balanzas se invertirá. Supongamos que la viga esté dividida desigualmente, y que la balanza ligeramente cargada esté en el extremo de un brazo muy largo; entonces la transferencia de cada disparo, produciendo un efecto mucho mayor, provocará mucho antes un cambio de posición. Utilizo la figura para ilustrar lo que resulta de transferir un individuo tras otro de la masa regulada de la comunidad a las estructuras reguladoras. La transferencia debilita a una y fortalece a la otra en un grado mucho mayor de lo que implica el cambio relativo de números. Un cuerpo relativamente pequeño de funcionarios, coherente, con intereses comunes y que actúa bajo una autoridad central, tiene una inmensa ventaja sobre un público incoherente que no tiene una política establecida y que sólo puede actuar unido bajo una fuerte provocación. De ahí que una organización de funcionarios, una vez superada cierta etapa de crecimiento, se vuelva cada vez menos resistible; como vemos en las burocracias del Continente.

No sólo el poder de resistencia de la parte regulada disminuye en una proporción geométrica a medida que aumenta la parte reguladora, sino que los intereses privados de muchos en la propia parte regulada hacen que el cambio de

proporción sea aún más rápido. En todos los círculos las conversaciones muestran que ahora, cuando la aprobación de los exámenes competitivos los hace elegibles para el servicio público, los jóvenes están siendo educados de tal manera que puedan aprobarlos y obtener empleo bajo el Gobierno. Una de las consecuencias es que los hombres que de otro modo reprobarían un mayor crecimiento del oficialismo, ahora lo ven con tolerancia, si no favorablemente, como ofreciendo posibles carreras para aquellos que dependen de ellos y aquellos relacionados con ellos. Cualquiera que recuerde el número de familias de clase alta y media ansiosas por colocar a sus hijos, verá que no es pequeño el estímulo a la propagación del control legislativo que ahora proviene de aquellos que, de no ser por los intereses personales que así surgen, serían hostiles a él.

Este deseo apremiante de carreras se ve reforzado por la preferencia de carreras que se consideran respetables. "Aunque su salario sea pequeño, su ocupación será la de un caballero", piensa el padre que quiere conseguir una plaza de funcionario para su hijo. Y esta relativa dignidad de los servidores del Estado, en comparación con los que se dedican a los negocios, aumenta a medida que la organización administrativa se convierte en un elemento más grande y poderoso de la sociedad, y tiende cada vez más a fijar el estándar del honor. La ambición predominante en un joven francés es conseguir un pequeño puesto oficial en su localidad, ascender desde allí a un lugar en el centro local de gobierno y, finalmente, llegar a alguna oficina central en París. Y en Rusia, donde la universalidad de la regulación estatal que caracteriza al tipo militante de sociedad se ha llevado más lejos, vemos esta ambición llevada al extremo. Dice el Sr. Wallace, citando un pasaje de una obra de teatro: "Todos los hombres, incluso los tenderos y los zapateros, aspiran a convertirse en oficiales, y el hombre que ha pasado toda su vida sin rango oficial parece no ser un ser humano."

Estas diversas influencias, que actúan desde arriba hacia abajo, se encuentran con una respuesta creciente de expectativas y solicitudes que proceden de abajo hacia arriba. Los trabajadores y sobrecargados que forman la gran mayoría, y más aún los incapaces ayudados perpetuamente, que siempre buscan más ayuda, están dispuestos a apoyar los planes que les prometen este u otro beneficio por parte de la agencia estatal, y están dispuestos a creer en aquellos que les dicen que tales beneficios pueden darse y deben darse. Escuchan con fe ávida a todos los constructores de castillos políticos, desde los graduados de Oxford hasta los irreconciliables irlandeses, y cada aparato adicional para su bienestar, financiado con impuestos, despierta esperanzas de más. De hecho, cuanto más numerosos se vuelven los instrumentos públicos, más se genera en los ciudadanos la noción de que todo se hará por ellos, y nada por ellos. Cada generación está menos

familiarizada con la consecución de los fines deseados mediante acciones individuales o combinaciones privadas, y más familiarizada con la consecución de los mismos mediante agencias gubernamentales; hasta que, finalmente, las agencias gubernamentales llegan a ser consideradas como las únicas agencias disponibles. Este resultado quedó bien demostrado en el reciente Congreso de Sindicatos celebrado en París. Los delegados ingleses, informando a sus electores, dijeron que, entre ellos y sus colegas extranjeros, "el punto de diferencia era la medida en que se debía pedir al Estado que protegiera el trabajo": se hacía así referencia al hecho, conspicuo en los informes de los procedimientos, de que los delegados franceses invocaron siempre el poder gubernamental como único medio de satisfacer sus deseos. La difusión de la educación ha trabajado, y trabajará aún más, en la misma dirección. "Debemos educar a nuestros amos", es la conocida frase de un liberal que se opuso a la última ampliación del derecho de voto. Sí, si la educación fuera digna de llamarse así, y fuera relevante para la ilustración política necesaria, se podría esperar mucho de ella. Pero conocer las reglas de sintaxis, ser capaz de sumar correctamente, tener información geográfica y una memoria repleta de fechas de ascensos de reyes y victorias de generales, no implica más aptitud para llegar a conclusiones políticas que la adquisición de habilidad en el dibujo implica pericia en telegrafía, o que la habilidad para jugar al cricket implica destreza con el violín. "Seguramente", replica alguien, "la facilidad en la lectura abre el camino al conocimiento político". Sin duda; pero ¿se seguirá el camino? Las conversaciones de sobremesa demuestran que nueve de cada diez personas leen lo que les divierte o interesa más que lo que les instruye, y que lo último que leen es algo que les dice verdades desagradables o les disipa esperanzas infundadas. Que la educación popular se traduce en una amplia lectura de publicaciones que fomentan ilusiones agradables, en lugar de aquellas que insisten en duras realidades, está fuera de toda duda. Dice "A Mechanic", escribiendo en la "Pall Mall Gazette" del 3 de diciembre de 1883:

La mejora de la educación infunde el deseo de cultura, la cultura infunde el deseo de muchas cosas que todavía están fuera del alcance de los trabajadores;... en la furiosa competencia a la que se ha entregado la época actual, son totalmente imposibles para las clases más pobres; por lo tanto, están descontentos con las cosas tal como son, y cuanto más educados, más descontentos. De ahí también que muchos de nosotros consideremos al Sr. Kuskin y al Sr. Morris como verdaderos profetas.

Y, que la conexión de causa y efecto aquí alegada es real, podemos verlo con suficiente claridad en el estado actual de Alemania.

Poseedores del poder electoral, como lo son ahora la mayoría de los que son inducidos a alimentar optimistas anticipaciones de los beneficios que se obtendrán mediante la reorganización social, resulta que cualquiera que busque sus votos debe al menos abstenerse de exponer sus creencias erróneas, incluso si no cede a la tentación de expresar su acuerdo con ellas. Todos los candidatos al Parlamento se ven impulsados a proponer o apoyar alguna nueva legislación ad captandum. Es más, incluso los jefes de los partidos, los que están ansiosos por conservar sus cargos y los que quieren arrebatárselos, intentan conseguir adeptos pujando unos por otros. Como hemos visto recientemente, cada uno se esfuerza por ganar una baza superando la buena carta de su antagonista. Y entonces, como nos muestran las divisiones en el Parlamento, la tradicional lealtad a los líderes prevalece sobre las cuestiones relativas a la conveniencia intrínseca de las medidas propuestas. Los representantes son lo bastante inconscientes como para votar a favor de proyectos de ley que consideran como esencialmente errónea en principio, porque las necesidades del partido y el interés por las próximas elecciones así lo exigen. Y así, una política viciosa es reforzada incluso por aquellos que ven su vileza.

Mientras tanto, en el exterior se desarrolla una activa propaganda a la que todas estas influencias son auxiliares. Las teorías comunistas, parcialmente aprobadas por una ley del Parlamento tras otra, y tácitamente, si no abiertamente, favorecidas por numerosos hombres públicos que buscan partidarios, están siendo defendidas cada vez más vociferantemente, bajo una u otra forma, por líderes populares, e instadas por sociedades organizadas. Está el movimiento para la nacionalización de la tierra que, teniendo como objetivo un sistema de tenencia de la tierra equitativo en abstracto, es, como todo el mundo sabe, impulsado por el Sr. George y sus amigos con desprecio declarado por las justas reivindicaciones de los propietarios existentes, y como base de un plan que va más allá del comunismo de Estado. Y luego está la Federación Democrática a ultranza del Sr. Hyndman y sus partidarios. Nos dicen que "el puñado de merodeadores que ahora están en posesión [de la tierra] no tienen ni pueden tener más derecho que la fuerza bruta contra las decenas de millones a los que agravian". Exclaman contra "los accionistas a los que se les ha permitido poner sus manos sobre (!) nuestras grandes comunicaciones ferroviarias". Condenan "sobre todo a la clase capitalista activa, a los prestamistas, a los agricultores, a los explotadores de minas, a los contratistas, a los intermediarios, a los señores de las fábricas, a los modernos negreros "que exigen" más y más plusvalía a los esclavos asalariados que emplean". Y piensan que "ya es hora" de que el comercio "se sustraiga al control de la codicia individual y del beneficio individual".

Queda por señalar que las tendencias así manifestadas se ven reforzadas por la defensa de la prensa, cada día más pronunciada. Los periodistas, siempre recelosos de decir lo que desagrada a sus lectores, algunos de ellos siguen la corriente y aumentan su fuerza. Las intromisiones legislativas que antes condenaban, ahora las pasan en silencio, si es que no las defienden; y hablan del *laissez-faire* como de una doctrina que ha explotado. "La gente ya no se asusta ante la idea del socialismo", es la afirmación que nos encontramos un día. Otro día, una ciudad que no adopta la Ley de Bibliotecas Gratuitas es objeto de burlas por estar alarmada por una medida tan moderadamente comunista. Y entonces, junto con las afirmaciones editoriales de que esta evolución económica está llegando y debe ser aceptada, se da prominencia a las contribuciones de sus defensores. Mientras tanto, los que consideran desastroso el curso reciente de la legislación, y ven que es probable que su curso futuro sea aún más desastroso, se ven reducidos al silencio por la creencia de que es inútil razonar con personas en estado de intoxicación política.

Véanse, pues, las numerosas causas concurrentes que amenazan continuamente con acelerar la transformación en curso. Está la propagación de la reglamentación causada por el seguimiento de precedentes, que se vuelven más autoritarios cuanto más lejos llega la política.

se lleva a cabo. Existe una necesidad cada vez mayor de medidas administrativas coercitivas y restrictivas derivada de los males imprevistos y las deficiencias de las medidas coercitivas y restrictivas precedentes. Además, cada interferencia estatal adicional refuerza la suposición tácita de que es deber del Estado ocuparse de todos los males y asegurar todos los beneficios. El creciente poder de una organización administrativa en crecimiento va acompañado de la disminución del poder del resto de la sociedad para resistirse a su mayor crecimiento y control. La multiplicación de carreras abiertas por una burocracia en desarrollo tienta a los miembros de las clases reguladas por ella a favorecer su extensión, como un añadido a las posibilidades de lugares seguros y respetables para sus parientes. El pueblo en general, inducido a considerar los beneficios recibidos a través de los organismos públicos como beneficios gratuitos, tiene sus esperanzas continuamente excitadas por las perspectivas de más. Una educación generalizada, que fomenta la difusión de errores agradables en lugar de verdades severas, hace que tales esperanzas sean más fuertes y más generales. Peor aún, tales esperanzas son atendidas por los candidatos a la elección pública para aumentar sus posibilidades de éxito; y los principales estadistas, en la búsqueda de los fines del partido, puján por el favor popular apoyándolas. Los entusiastas políticos y los insensatos filántropos, que obtienen

repetidas justificaciones de las nuevas leyes que armonizan con sus doctrinas, impulsan sus agitaciones con creciente confianza y éxito. El periodismo, siempre sensible a la opinión popular, la fortalece diariamente dándole voz; mientras que la opinión contraria, cada vez más desalentada, encuentra poca expresión.

Así, influencias de diversos tipos conspiran para aumentar la acción corporativa y disminuir la acción individual. Y el cambio está siendo por todas partes ayudado por intrigantes, cada uno de los cuales piensa sólo en su proyecto favorito, y en absoluto en la reorganización general que el suyo, unido a otros semejantes, está elaborando. Se dice que la Revolución Francesa devoró a sus propios hijos. Aquí no parece improbable una catástrofe análoga. Los numerosos cambios socialistas introducidos por ley del Parlamento, unidos a los muchos otros que se introducirán en el futuro, se fundirán todos en el socialismo de Estado, tragados por la inmensa ola que han levantado poco a poco.

"Pero, ¿por qué se describe este cambio como 'la esclavitud venidera'?" es una pregunta que muchos seguirán haciéndose. La respuesta es sencilla. Todo socialismo implica esclavitud.

¿Qué es lo esencial en la idea de esclavo? En primer lugar, pensamos en él como alguien que es propiedad de otro. Sin embargo, para ser más que nominal, la propiedad debe demostrarse mediante el control de las acciones del esclavo, un control que habitualmente beneficia al controlador. Lo que distingue fundamentalmente al esclavo es que trabaja bajo coacción para satisfacer los deseos de otro. La relación admite diversas gradaciones. Recordando que, en su origen, el esclavo es un prisionero cuya vida está a merced de su captor, baste señalar aquí que existe una forma dura de esclavitud en la que, tratado como un animal, tiene que emplear todo su esfuerzo para satisfacer sus deseos. ventaja para el propietario. Con un sistema menos severo, aunque se ocupe principalmente de trabajar para su propietario, se le permite un breve periodo de tiempo para trabajar por su cuenta, y algo de terreno en el que cultivar alimentos adicionales. Otra mejora le permite vender los productos de su parcela y quedarse con las ganancias. Luego llegamos a la forma aún más moderada que surge comúnmente cuando, habiendo sido un hombre libre que trabaja en su propia tierra, la conquista lo convierte en lo que distinguimos como siervo; y tiene que dar a su propietario cada año una cantidad fija de trabajo o producto, o ambos, reteniendo él mismo el resto. Por último, en algunos casos, como en Rusia hasta hace poco, se le permite abandonar la propiedad de su dueño y trabajar o comerciar por su cuenta en otro lugar, con la condición de que pague

una suma anual. ¿Qué es lo que, en estos casos, nos lleva a calificar nuestra concepción de la esclavitud como más o menos severa? Evidentemente, el mayor o menor grado en que el esfuerzo se emplea obligatoriamente en beneficio de otro en lugar de en beneficio propio. Si todo el trabajo del esclavo es para su dueño, la esclavitud es pesada, y si es poco, es ligera. Demos ahora un paso más. Supongamos que un propietario muere, y su propiedad con sus esclavos pasa a manos de fideicomisarios, o supongamos que la propiedad y todo lo que hay en ella es comprado por una compañía; ¿es la condición del esclavo mejor si la cantidad de su trabajo obligatorio sigue siendo la misma? Supongamos que sustituimos la empresa por la comunidad; ¿hay alguna diferencia para el esclavo si el tiempo que tiene que trabajar para otros es tan grande y el tiempo que le queda para sí mismo es tan pequeño como antes? La cuestión esencial es:

¿cuánto está obligado a trabajar en beneficio de otros y cuánto puede trabajar en beneficio propio? El grado de su esclavitud varía según la proporción entre lo que se le obliga a ceder y lo que se le permite retener; y no importa si su amo es una sola persona o una sociedad. Si, sin opción, tiene que trabajar para la sociedad, y recibe de la reserva general la parte que la sociedad le concede, se convierte en esclavo de la sociedad. Los arreglos socialistas necesitan una esclavitud de este tipo; y hacia tal esclavitud nos llevan muchas medidas recientes, y aún más las medidas preconizadas. Observemos, primero, sus efectos inmediatos y, después, sus efectos finales.

La política iniciada por las Leyes de Viviendas Industriales admite desarrollo, y se desarrollará. "Cuando los organismos municipales se convierten en constructores de viviendas, reducen inevitablemente el valor de las viviendas construidas de otro modo y frenan la oferta de otras nuevas. Todo dictado relativo a los modos de construcción y a las comodidades que deben proporcionarse disminuye el beneficio del constructor y le incita a utilizar su capital donde el beneficio no disminuya. Así, también, el propietario, que ya encuentra que las casas pequeñas conllevan mucho trabajo y muchas pérdidas, que ya está sujeto a problemas de inspección e interferencia y a los consiguientes costes, y que su propiedad se convierte cada día en una inversión más indeseable, se ve impulsado a vender; y, como los compradores son disuadidos por razones similares, tiene que vender con pérdidas. Y ahora estas regulaciones que se siguen multiplicando, terminando, puede ser, como propone Lord Grey, en una

exigir al propietario que mantenga la salubridad de sus casas desalojando a los inquilinos sucios, y añadiendo así a sus otras responsabilidades la de inspector de las molestias, debe acelerar aún más las ventas y disuadir aún más a los compradores, por lo que será necesaria una mayor depreciación. ¿Qué debe

ocurrir? La multiplicación de las viviendas, y sobre todo de las viviendas pequeñas, se ve cada vez más frenada, por lo que las autoridades locales se ven obligadas a suplir la falta de oferta. Cada vez más, el organismo municipal o afín tendrá que construir casas, o comprar casas que se han vuelto invendibles para los particulares en la forma indicada; casas que, muy depreciadas en valor como deben llegar a ser, en muchos casos, valdrá la pena comprar en lugar de construir otras nuevas. Y entonces, cuando en las ciudades este proceso haya llegado tan lejos como para convertir a la autoridad local en el principal propietario de casas, habrá un buen precedente para proporcionar públicamente casas para la población rural, como se propone en el programa radical, y como insta la Federación Democrática, que insiste en "la construcción obligatoria de viviendas sanas para artesanos y trabajadores agrícolas en proporción a la población". Manifiestamente, la tendencia de lo que se ha hecho, se está haciendo y se va a hacer actualmente, es acercarse al ideal socialista en el que la comunidad es la única propietaria de las viviendas.

Tal debe ser también el efecto de la creciente política diaria sobre la tenencia y utilización de la tierra. Los beneficios públicos cada vez más numerosos, que han de lograrse por medio de organismos públicos cada vez más numerosos, a costa de cargas públicas cada vez mayores, han de deducirse cada vez más de los rendimientos de la tierra; hasta que, a medida que la depreciación del valor sea cada vez mayor, la resistencia al cambio de tenencia sea cada vez menor. Ya, como todo el mundo sabe, hay en muchos lugares dificultad para obtener arrendatarios, incluso a rentas muy reducidas; y la tierra de fertilidad inferior en algunos casos permanece ociosa, o cuando es cultivada por el propietario a menudo se cultiva con pérdidas. Es evidente que el margen de beneficio sobre el capital invertido en la tierra no es tal que los impuestos, locales y generales, puedan aumentarse considerablemente para sostener administraciones públicas ampliadas, sin una absorción del mismo que impulse a los propietarios a vender, y aprovechar al máximo el precio reducido que puedan obtener emigrando y comprando tierras no sujetas a pesadas cargas, como, de hecho, algunos están haciendo ahora. Este proceso, llevado lejos, debe tener el resultado de expulsar del cultivo a las tierras inferiores; después de lo cual se planteará de manera más general la demanda hecha por el Sr. Arch, quien, dirigiéndose recientemente a la Asociación Radical de Brighton, y sosteniendo que los terratenientes existentes no hacen que sus tierras sean adecuadamente productivas para el beneficio público, dijo que "le gustaría que el Gobierno actual aprobara un Proyecto de Ley de Cultivo Obligatorio": una propuesta aplaudida que justificó con el ejemplo de la vacunación obligatoria (ilustrando así la influencia del precedente). Y esta demanda será presionada, no sólo por la necesidad de hacer productiva la tierra, sino también por la necesidad de

emplear a la población rural. Después de que el Gobierno haya extendido la práctica de contratar a desempleados para trabajar en tierras desiertas, o tierras adquiridas a precios nominales, se habrá llegado a una etapa en la que no hay más que un pequeño paso más hacia ese arreglo que, en el programa de la Federación Democrática, debe seguir a la nacionalización de la tierra: la "organización de ejércitos agrícolas e industriales bajo el control del Estado sobre la base de principios cooperativos."

Si alguien duda de que se pueda llegar a tal revolución, se pueden citar hechos que demuestran su probabilidad. En la Galia, durante la decadencia del Imperio Romano, "eran tan numerosos los receptores en comparación con los pagadores, y tan enorme el peso de los impuestos, que el trabajador se vino abajo, las llanuras se convirtieron en desiertos, y crecieron bosques donde había estado el arado". Del mismo modo, cuando se acercaba la Revolución Francesa, las cargas públicas habían llegado a ser tales que muchas granjas permanecían sin cultivar, y muchas estaban desiertas: una cuarta parte del suelo estaba absolutamente baldío; y en algunas provincias la mitad estaba en brezales. Tampoco en nuestro país han faltado incidentes de naturaleza similar. Además de los hechos de que bajo la antigua ley de pobres las tasas habían subido en algunas parroquias a la mitad del alquiler, y que en varios lugares las granjas estaban sin cultivar, está el hecho de que en un caso las tasas habían absorbido todo el producto de la tierra.

En Cholesbury, en Buckinghamshire, en 1832, la tasa de pobres "cesó repentinamente como consecuencia de la imposibilidad de continuar su recaudación, habiendo renunciado los terratenientes a sus rentas, los granjeros a sus arrendamientos y el clérigo a su gleba y sus diezmos". El clérigo, el Sr. Jeston, afirma que en octubre de 1882, los funcionarios de la parroquia abandonaron sus libros, y los pobres se reunieron en masa ante su puerta mientras él estaba en cama, pidiendo consejo y comida. En parte por sus propios medios, en parte por la caridad de los vecinos, y en parte por las tasas de ayuda, impuestas a las parroquias vecinas, se mantuvieron durante algún tiempo".

Los comisionados añaden que "el benévolo rector recomienda que la totalidad de la tierra se reparta entre los indigentes sanos", con la esperanza de que, tras la ayuda prestada durante dos años, puedan mantenerse por sí mismos. Estos hechos, que dan color a la profecía hecha en el Parlamento de que la continuación de la antigua ley de pobres durante otros treinta años dejaría la tierra sin cultivar, demuestran claramente que el aumento de las cargas públicas puede terminar en el cultivo forzado bajo control público.

Por último, la propiedad estatal de los ferrocarriles. Ya existe en gran medida en el continente. Ya hemos tenido aquí hace unos años una fuerte defensa de la misma. Y ahora el grito que lanzaron varios políticos y publicistas es retomado por la Federación Democrática, que propone "la apropiación estatal de los ferrocarriles, con o sin compensación". Evidentemente, es probable que la presión desde arriba, unida a la presión desde abajo, efectúe este cambio, dictado por la política que se extiende por todas partes; y con él deben venir muchos cambios concomitantes. En efecto, se ha permitido que los propietarios de ferrocarriles, que en un principio sólo eran propietarios y trabajadores de los ferrocarriles, se conviertan en dueños de numerosas empresas directa o indirectamente relacionadas con los ferrocarriles; y éstas tendrán que ser adquiridas por el Gobierno cuando se compren los ferrocarriles. Siendo ya transportista exclusivo de cartas, transmisor exclusivo de telegramas, y en vías de convertirse en transportista exclusivo de paquetes, el Estado no sólo será transportista exclusivo de pasajeros, mercancías y minerales, sino que añadirá a sus diversos oficios actuales muchos otros oficios. Incluso ahora, además de erigir sus establecimientos navales y militares, y construir puertos, muelles, rompeolas, etc., hace el trabajo de constructor de barcos, cañonero, fabricante de armas pequeñas, fabricante de municiones, etc., etc.; y, cuando los ferrocarriles hayan sido apropiados "con o sin compensación", como dicen los federalistas demócratas, tendrá que convertirse en constructor de locomotoras, fabricante de vagones, fabricante de lonas y grasas, propietario de barcos de pasajeros, minero del carbón, cantero, propietario de ómnibus, etc. Mientras tanto, sus lugartenientes locales, los gobiernos municipales, ya en muchos lugares proveedores de agua, fabricantes de gas, propietarios y trabajadores de tranvías, propietarios de baños, sin duda habrán emprendido otros negocios. Y cuando el Estado, directamente o por delegación, haya adquirido o creado numerosas empresas de producción al por mayor y de distribución al por mayor, habrá buenos precedentes para extender su función a la distribución al por menor: siguiendo el ejemplo, por ejemplo, del Gobierno francés, que ha sido durante mucho tiempo estanco al por menor.

Evidentemente, entonces, los cambios hechos, los cambios en progreso y los cambios urgidos, nos están llevando no sólo hacia la propiedad estatal de la tierra y las viviendas y los medios de comunicación, todo para ser administrado y trabajado por agentes estatales, sino hacia la usurpación estatal de todas las industrias; las formas privadas de las cuales, en desventaja cada vez mayor en la competencia con el Estado, que puede arreglar todo para su propia conveniencia, morirán cada vez más, así como muchas escuelas voluntarias lo han hecho, en presencia de los internados. Y así se realizará el ideal deseado del socialista.

Y ahora que se ha alcanzado este ideal deseado, que los políticos "prácticos" están ayudando a los socialistas a alcanzar, y que es tan tentador en ese lado brillante que los socialistas contemplan, ¿cuál debe ser el lado sombrío que lo acompaña y que ellos no contemplan? Es una observación común, hecha a menudo cuando un matrimonio es inminente, que aquellos poseídos por grandes esperanzas habitualmente se detienen en los placeres prometidos y no piensan en los dolores que los acompañan. Un ejemplo más de esta verdad nos lo proporcionan los entusiastas políticos y los revolucionarios fanáticos. Impresionados con las miserias que existen bajo nuestros actuales arreglos sociales, y no considerando estas miserias como causadas por el mal funcionamiento de una naturaleza humana sino parcialmente adaptada al estado social, ellos imaginan para ser curados inmediatamente por este o aquel reordenamiento. Sin embargo, incluso si sus planes tuvieran éxito, sólo podría ser mediante la sustitución de un tipo de mal por otro. Un poco de reflexión deliberada mostraría que, bajo los arreglos propuestos, sus libertades debían ceder en la misma proporción en que se cuidaba de su bienestar material.

Porque ninguna forma de cooperación, pequeña o grande, puede llevarse a cabo sin una regulación y una sumisión implícita a los organismos reguladores. Incluso una de sus propias organizaciones para efectuar cambios sociales les da pruebas. Está obligada a tener sus consejos, sus funcionarios locales y generales, sus líderes autorizados, que deben ser obedecidos bajo pena de confusión y fracaso. Y la experiencia de aquellos que defienden a ultranza un nuevo orden social bajo el control paternal de un gobierno demuestra que, incluso en las sociedades privadas formadas voluntariamente, el poder de la organización reguladora se hace grande, si no irresistible; a menudo, de hecho, provoca quejas e intranquilidad entre los controlados. Los sindicatos que llevan a cabo una especie de guerra industrial en defensa de los intereses de los trabajadores frente a los intereses de los empleadores encuentran que la subordinación casi militar en su rigor es necesaria para asegurar una acción eficaz, ya que los consejos divididos resultan fatales para el éxito. E incluso en los cuerpos de cooperativistas, formados para llevar a cabo negocios de fabricación o distribución, y que no necesitan la obediencia a los líderes que se requiere cuando los objetivos son ofensivos o defensivos, todavía se encuentra que la agencia administrativa adquiere un poder tan grande que surgen quejas sobre "la tiranía de la organización." Juzgad, pues, lo que debe suceder cuando, en lugar de combinaciones, pequeñas, locales y voluntarias, a las que los hombres pueden pertenecer o no según les plazca, tenemos una combinación nacional en la que cada ciudadano se encuentra incorporado, y de la que no puede separarse sin abandonar el país. Juzgad lo que en tales condiciones debe llegar a ser el poder de un oficialismo graduado y centralizado, que tiene en sus manos los

recursos de la comunidad, y que tiene detrás de sí cualquier cantidad de fuerza que encuentre necesaria para llevar a cabo sus decretos y mantener lo que llama orden. Bien puede un Príncipe Bismarck mostrar inclinaciones hacia el estado-socialismo.

Y entonces, después de reconocer, como deben hacerlo si piensan su esquema, el poder que posee la agencia reguladora en el nuevo sistema social tan tentadoramente imaginado, que sus defensores se pregunten a qué fin debe usarse este poder. Sin detenerse exclusivamente, como lo hacen habitualmente, en el bienestar material y las gratificaciones mentales que les proporcionará una administración benéfica, que se detengan un poco en el precio que hay que pagar. Los funcionarios no pueden crear los suministros necesarios; sólo pueden distribuir entre los individuos lo que éstos se han unido para producir. Si el organismo público está obligado a proveerlos, debe exigirles recíprocamente que proporcionen los medios. No puede haber, como en nuestro sistema actual, un acuerdo entre el empleador y el empleado.

el régimen excluye. En su lugar debe haber un mando de las autoridades locales sobre los trabajadores, y la aceptación por parte de los trabajadores de lo que las autoridades les asignen. Y éste es, de hecho, el arreglo claramente, pero al parecer inadvertidamente, señalado por los miembros de la Federación Democrática. Proponen que la producción sea llevada a cabo por "ejércitos agrícolas e industriales bajo el control del Estado", aparentemente sin recordar que los ejércitos presuponen grados de oficiales, a los que habría que exigir obediencia, ya que de otro modo no se podría asegurar ni el orden ni el trabajo eficiente. De modo que cada uno se situaría frente al organismo gobernante en la relación de esclavo a amo.

"Pero la agencia gobernante sería un amo que él y otros hicieran y mantuvieran constantemente bajo control, y que por lo tanto no lo controlaría a él o a otros más de lo necesario para el beneficio de todos y cada uno".

A lo que la primera réplica es que, aunque así fuera, cada miembro de la comunidad como individuo sería un esclavo de la comunidad en su conjunto. Tal relación ha existido habitualmente en las comunidades militantes, incluso bajo formas de gobierno casi populares. En la antigua Grecia, el principio aceptado era que el ciudadano no se pertenecía a sí mismo ni a su familia, sino a su ciudad.

-siendo la ciudad con el griego equivalente a la comunidad. Y esta doctrina, propia de un estado de guerra constante, es una doctrina que el socialismo reintroduce inadvertidamente en un estado destinado a ser puramente industrial. Los servicios de cada uno pertenecerán al conjunto de todos; y por estos servicios se darán los rendimientos que las autoridades consideren apropiados. De modo que incluso si la administración es del tipo benéfico que se pretende asegurar, la esclavitud, por leve que sea, debe ser el resultado del arreglo.

Una segunda réplica es que la administración no será del tipo previsto, y que la esclavitud no será leve. La especulación socialista está viciada por una suposición como la que vicia las especulaciones del político "práctico". Se supone que el oficialismo funcionará como se pretende que funcione, lo que nunca ocurre. La maquinaria del comunismo, como la maquinaria social existente, tiene que estar enmarcada en la naturaleza humana existente; y los defectos de la naturaleza humana existente generarán en la una los mismos males que en la otra. El amor al poder, el egoísmo, la injusticia, la falsedad, que a menudo en tiempos comparativamente cortos llevan al desastre a las organizaciones privadas, inevitablemente, cuando sus efectos se acumulen de generación en generación, obrarán males mucho mayores y menos remediabiles; puesto que vasta y compleja y poseedora de todos los recursos, la organización administrativa una vez desarrollada y consolidada debe volverse irresistible. Y si hace falta una prueba de que el ejercicio periódico del poder electoral no lo impediría, baste citar el caso del Gobierno francés, que, de origen puramente popular y sometido de vez en cuando al juicio popular, pisotea sin embargo la libertad de los ciudadanos en una medida que los delegados ingleses del último Trades Union Congress dicen que "es una vergüenza y una anomalía en una nación republicana".

El resultado final sería un resurgimiento del despotismo. Un ejército disciplinado de funcionarios civiles, al igual que un ejército de funcionarios militares, confiere el poder supremo a su jefe, un poder que a menudo ha conducido a la usurpación, como en la Europa medieval y aún más en Japón, es más, así ha conducido a nuestros vecinos en nuestros propios tiempos. Las recientes confesiones del Sr. de Maupas han demostrado con qué facilidad un jefe constitucional, elegido y en el que confía todo el pueblo, puede, con la ayuda de unos pocos confederados sin escrúpulos, paralizar el cuerpo representativo y convertirse en autócrata. Tenemos buenas razones para concluir que quienes ascendieran al poder en una organización socialista no tendrían escrúpulos en llevar a cabo sus objetivos a toda costa. Cuando encontramos que los accionistas, que, a veces ganando, pero a menudo perdiendo, han hecho ese sistema

ferroviario por el cual la prosperidad nacional se ha incrementado tan grandemente, son mencionados por el consejo de la Federación Democrática como habiendo "puesto sus manos" en los medios de comunicación, podemos inferir que aquellos que dirigían una administración socialista podrían interpretar con extrema perversidad las reclamaciones de los individuos y las clases bajo su control. Y cuando, además, encontramos a miembros de este mismo consejo instando a que el Estado tome posesión de los ferrocarriles, "con o sin compensación", podemos sospechar que los jefes de la sociedad ideal deseada, no se verían muy disuadidos por consideraciones de equidad de seguir cualquier política que considerasen necesaria, una política que siempre se identificaría con su propia supremacía. No se necesitaría más que una guerra con una sociedad adyacente, o algún descontento interno que exigiera una supresión forzosa, para transformar de inmediato una administración socialista en una tiranía aplastante como la del antiguo Perú, bajo la cual la masa del pueblo, controlada por grados de funcionarios y llevando una vida que era inspeccionada al aire libre y en el interior, trabajaba para el sustento de la organización que la regulaba, y no le quedaba más que una mera subsistencia para sí misma. Y entonces reviviría por completo, bajo una forma diferente, ese régimen de estatus, ese sistema de cooperación obligatoria, cuya decadente tradición está representada por el viejo toryismo, y hacia el que el nuevo toryismo nos está llevando de vuelta.

"Pero estaremos en guardia contra todo eso, tomaremos precauciones para evitar tales desastres", dirán sin duda los entusiastas. Ya sean políticos "prácticos" con sus nuevas medidas reguladoras, o comunistas con sus planes para reorganizar el trabajo, la respuesta es siempre la misma: "Es cierto que planes de naturaleza similar, por causas imprevistas y accidentes adversos, o por las malas acciones de los implicados, han fracasado; pero esta vez nos beneficiaremos de las experiencias pasadas y tendremos éxito". No parece posible conseguir que la gente acepte la verdad, que sin embargo es bastante evidente, de que el bienestar de una sociedad y la justicia de sus acuerdos dependen en el fondo de la capacidad de la sociedad para hacer frente a sus problemas.

y que la mejora de ninguno de ellos puede tener lugar sin la mejora del carácter que resulta de llevar a cabo una industria pacífica bajo las restricciones impuestas por una vida social ordenada. La creencia, no sólo de los socialistas, sino también de los llamados liberales que están preparando diligentemente el camino para ellos, es que con la debida habilidad una humanidad mal trabajadora puede convertirse en instituciones bien trabajadoras. Es un engaño.

La naturaleza defectuosa de los ciudadanos se manifestará en la mala actuación de cualquier estructura social en la que se organicen. No hay alquimia política que pueda obtener una conducta dorada de instintos plomizos.